

**PRIMERA SALA UNITARIA
EXPEDIENTE: 2057/2016.**

GUADALAJARA, JALISCO, A NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

V I S T O S para resolver en **sentencia definitiva** los autos del juicio administrativo con número de expediente indicado al rubro superior derecho, promovido por [REDACTED], en contra de la SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO y del POLICÍA VIAL CON NÚMERO DE ORDEN 1650 ADSCRITO A LA CITADA SECRETARÍA.

R E S U L T A N D O

1. Mediante escrito presentado ante esta Primera Sala Unitaria el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, el ciudadano Héctor Santana Monroy interpuso por su propio derecho, demanda en la vía contenciosa administrativa en contra de las autoridades que se citan en el párrafo que antecede, teniendo como acto impugnado: la cédula de infracción con número de folio: 19563065-8, emitida por el Policía Vial con número de orden 1650, adscrito a la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, respecto del automotor con placas de circulación [REDACTED] de la citada entidad federativa; demanda que se admitió por auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis, previo cumplimiento de requerimiento.

2. En el mismo acuerdo se admitieron las pruebas ofrecidas, las cuales se tuvieron por desahogadas dada su propia naturaleza; se ordenó emplazar a la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, corriéndole traslado con las copias simples del escrito de demanda y sus anexos para que produjera contestación a la misma, apercibida de las consecuencias legales de no hacerlo, y se requirió para que dentro del término de cinco días, contando a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del citado proveído, exhibiera en copia certificada la infracción controvertida, apercibida que de no allegarla al presente juicio en la forma y plazo concedido, se tendrían por ciertos los hechos que el actor le imputó.

3. Por auto de siete de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo a quien se ostenta como Encargada del Área de Procedimientos Administrativos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, remitiendo a esta Sala Unitaria copia certificada de la cédula de infracción combatida, por lo que se concedió a la parte actora el término legal para que ampliara su demanda respecto de la misma; por otro lado, se tuvo al Titular de la citada Secretaría contestando la demanda, se admitieron las pruebas que ofreció, las cuales se tuvieron por desahogadas dada su propia naturaleza.

**PRIMERA SALA UNITARIA
EXPEDIENTE: 2057/2016.**

4. Mediante acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, se tuvo a la parte actora ampliando su demanda, y se ordenó emplazar al Policía Vial con número de orden 1650 adscrito a la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, corriéndole traslado con las copias simples del escrito de demanda y sus anexos, para que produjera contestación, apercibida de las consecuencias legales de no hacerlo.

5. Por acuerdo de seis de julio de dos mil diecisiete, se hizo constar que el Policía Vial con número de orden 1650 adscrito a la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, no produjo contestación a la ampliación de demanda, por lo que se tuvieron por ciertos los hechos que el actor le imputó, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resultaran desvirtuados.

6. A través del proveído de siete de junio de dos mil diecisiete, se advirtió que no existía ninguna prueba pendiente por desahogar, y se concedió a las partes el término legal para que formularan por escrito sus alegatos, sin que ninguna lo hiciera, razón por la cual se ordenó traer los autos a la vista para dictar la sentencia definitiva correspondiente.

C O N S I D E R A N D O

I. Esta Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco es competente para conocer y resolver la presente controversia con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 57 y 67 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la citada entidad federativa.

II. La existencia del acto controvertido se encuentra debidamente acreditada con el documento que en copia certifica obra agregado a foja 18 de autos, al que se le otorga pleno valor probatorio al tenor de los numerales 399 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia y 58 primer párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, por tratarse de un instrumento público.

III. Al no haber cuestiones de previo y especial pronunciamiento, se procede al estudio de aquellos conceptos de impugnación que de resultar fundados llevarían a esta Sala Unitaria a declarar la nulidad lisa y llana de la cédula de infracción impugnada por el demandante en términos de lo dispuesto por el arábigo 72 de la ley de la materia.

**PRIMERA SALA UNITARIA
EXPEDIENTE: 2057/2016.**

Es aplicable por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia número I.4o.A. J/44¹, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala:

“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EN ATENCIÓN AL ORDEN QUE SEÑALA EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN, DEBEN ANALIZARSE EN PRIMER LUGAR AQUELLOS QUE LLEVEN A DECLARAR LA NULIDAD MÁS BENÉFICA PARA EL ACTOR. En el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación se encuentra contenido el principio de exhaustividad de las sentencias en materia fiscal, al imponer a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la obligación de examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, **iniciando por aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana**, y después por los que se refieran a la omisión de requisitos formales o vicios del procedimiento, lo que se traduce en la obligación de analizar, en primer lugar, los motivos de nulidad que lleven a una declaratoria de nulidad más benéfica para el actor, y sólo en el evento de estimarlos infundados, se pronuncie sobre los conceptos de impugnación que lleven a una declaratoria de nulidad para efectos, bien sea de la llamada comúnmente "del tercer tipo", por versar sobre el ejercicio de facultades discrecionales o, en su caso, para otros efectos.”

IV. En ese sentido se estudia el concepto de impugnación que planteó el accionante en su ampliación de demanda, consistente en que la cédula de infracción controvertida es ilegal, porque no se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que la autoridad emisora no circunstanció los hechos acontecidos y cómo fue que se percató de ellos, pues debió señalar las razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para emitir dicho acto, es decir, no precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar que tomó en cuenta para encuadrar su conducta con la hipótesis normativa en la que sustentó dicha sanción, transgrediendo así lo dispuesto por los artículos 16 Constitucional y 13 de la ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

Quien esto resuelve estima fundado el concepto de anulación planteado por el enjuiciante, toda vez que el requisito de la debida fundamentación y motivación se satisface en el cuerpo de un acto

¹ Publicada en la página 1646 del tomo XXIII de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de dos mil seis, registro número 174974.

**PRIMERA SALA UNITARIA
EXPEDIENTE: 2057/2016.**

administrativo cuando la autoridad que lo efectúa cita los ordinales aplicables al caso concreto y precisa las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para expedirlo, efectuando una adecuación entre las situaciones jurídicas o de hecho y las hipótesis contenidas en los preceptos legales en los que sustentó su actuar de acuerdo a lo estatuido en el numeral 16 Constitucional.

Ahora bien, la cédula de infracción impugnada, fue fundada y motivada de la siguiente manera:

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.

"Artículo 175. Se sancionará a los conductores o propietarios de vehículos que cometan las siguientes infracciones:

...

V. No presentar la tarjeta de circulación vigente o pago de refrendo vehicular vigente";

"Artículo 176. Se sancionará a los conductores o propietarios de vehículos que cometan las siguientes infracciones:

I. No presentar licencia o permiso vigente para conducir";

"Artículo 184. Se sancionará en los términos del artículo 174, a los conductores o propietarios de cualquier tipo de motocicleta, trimoto, cuatrimoto, o motocarro, cuando al circular cometan las siguientes infracciones:

I. No porte, debidamente colocado y ajustado con las correas de seguridad, casco protector para motociclista y, en su caso, también su acompañante;

Señalando como motivación la siguiente:

"No presento tarjeta de circulación"

"No presento licencia de motociclista"

"No utilizar equipo de protección (casco) conductor"

De ahí que este Juzgador concluya que el Funcionario Público quien expidió el acto recurrido, se limitó a describir parcialmente las hipótesis previstas en los preceptos legales referidos, sin adecuar las mismas a las conductas omitidas por el conductor de la motocicleta materia de la sanción controvertida, debiendo especificar en su lugar, como fue que se percató de que no estaba utilizando el equipo de seguridad, si se encontraba circulando o estaba estacionado; debió manifestar como se dio cuenta de

**PRIMERA SALA UNITARIA
EXPEDIENTE: 2057/2016.**

que quien conducía el respectivo automotor no contaba con la licencia para conducir y con la tarjeta de circulación correspondiente, si se le detuvo para efecto de requerírseles y éste no los traía consigo o como se hizo sabedor de ello, es decir, todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar correspondientes, que no dejaran dudas sobre la comisión de las acciones reprochadas al demandante.

Robustece lo sentenciado la siguiente tesis de jurisprudencia, la cual tiene por rubro, texto y datos de localización los siguientes²:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.”

Por ello, resulta insuficiente la motivación plasmada en el documento reprochado por la parte actora, debido a que el funcionario público que lo

² Publicada en la página 43 de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de mil novecientos noventa y tres.

**PRIMERA SALA UNITARIA
EXPEDIENTE: 2057/2016.**

emitió transcribió parcialmente lo establecido en los multicitados ordinales, omitiendo describir de manera clara y precisa los comportamientos que dieron origen a las infracciones de mérito y haberlos adecuado con los preceptos legales en los que sustentó dicho acto, contraviniéndose así a lo dispuesto en los artículos 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizándose la causa de anulación prevista en el numeral 75 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, siendo procedente declarar la **nulidad lisa y llana de la cédula de infracción con número de folio: 19563065-8, emitida por el Policía Vial con número de orden 1650, adscrito a la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, respecto del automotor con placas de circulación [REDACTED] de la citada entidad federativa.**

En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, 74 fracción II, 75 fracción II, y 76 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, es de resolverse conforme a los siguientes:

R E S O L U T I V O S

PRIMERO. Esta Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, es competente para tramitar y resolver este juicio.

SEGUNDO. La parte actora probó los hechos constitutivos de su acción y las enjuiciadas no opusieron excepciones, por lo tanto;

TERCERO. Se declara la nulidad lisa y llana del acto administrativo controvertido, consistente en: la cédula de infracción con número de folio: 19563065-8, emitida por el Policía Vial con número de orden 1650, adscrito a la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, respecto del automotor con placas de circulación [REDACTED] de la citada entidad federativa.

CUARTO. Se ordena a la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, efectúe la cancelación de la cédula de infracción descrita en el párrafo que antecede, emitiendo el acuerdo correspondiente, además que deberá realizar las anotaciones respectivas en su base de datos, informando y acreditando todo ello a esta Primera Sala Unitaria; lo anterior de conformidad a lo dispuesto por los artículos 18 fracción I, inciso f), 174 y 198 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, reformados mediante decreto número 25423/LX/15 publicado con fecha doce de noviembre del año dos mil quince, en vigor a partir del día trece de noviembre de la citada anualidad, en los cuales se establece que a la citada

**PRIMERA SALA UNITARIA
EXPEDIENTE: 2057/2016.**

Secretaría le compete la emisión de las cédulas de infracción en materia de movilidad, ello, por conducto de sus Policías Viales y su Director General Jurídico.

NOTIFÍQUESE POR LISTA Y BOLETÍN JUDICIAL A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.

Así lo resolvió el Magistrado **HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ**, Presidente de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, creado mediante Decreto número 26408/LXI/17 publicado el 18 de julio de 2017, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", vigente a partir del día siguiente de su publicación, actuando ante la Secretaria de Sala, Licenciada **Norma Cristina Flores López**, quien autoriza y da fe.-----

HLH/NCFL/mqj*

"La Sala o Ponencia que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la parte actora, etc.), información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente."